

Declaración de los Presidentes del Senado y Cámara de Diputados

1724

"Ningún chileno ni chilena a través del territorio de la República ignora que el país se encuentra en una situación de extrema gravedad.

En estas circunstancias, como Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y representantes de las mayorías de ambas ramas del Congreso, creemos un deber expresar nuestra opinión ante el país.

Es un hecho que Chile atraviesa por una de las más grandes crisis en el orden político, económico, social y moral, que ha conocido en su historia.

Se ha querido imponer por una minoría un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza.

Las consecuencias están a la vista: Una inflación desatada hasta límites intolerables; una moneda que se derrumba de manera dramática; escasez de productos esenciales, mercado negro, destrucción del aparato productivo, carencia de inversiones, desaliento y disminución del ritmo de trabajo en todas las esferas de la actividad nacional.

Todo ello provoca una profunda angustia que se agudiza y se extiende a todos los sectores del pueblo y es la causa fundamental de la desesperación en que están sumidos tantos chilenos.

Por otra parte el país está perdiendo una proporción considerable de su capital humano. Profesionales, técnicos y obreros especializados están saliendo a buscar trabajo y horizontes en otros países pues no lo encuentran en su propia patria.

A esto se agrega un proceso organizado de odio y violencia que dividen al país.

La injuria a las personas que no pertenecen a los sectores de Gobierno es sistemática.

Se recurre a las falsedades más desvergonzadas para tratar de incitar en su contra a los grupos extremos, con propósitos evidentes.

Particularmente se vilipendia con un lenguaje

procaz a los otros poderes públicos como la Magistratura, la Contraloría y el Congreso Nacional.

Las instituciones y las leyes no son respetadas y éstas se burlan en forma ya desembozada.

Este proceso se ha agudizado hasta el extremo límite en los últimos días.

Con motivo de una irresponsable acción reprimida por las propias Fuerzas Armadas y en la cual ninguno de los sectores democráticos tuvo, por supuesto, participación alguna, se ha ordenado la ocupación de fábricas y predios rurales, se han reforzado los cordones industriales con los que se pretende cercar la ciudad y, lo que es más grave, existe la certeza de que se reparten armas, y se adoptan disposiciones estratégicas y se lanzan instructivos como si Chile estuviera al borde de una guerra interior.

Los sectores democráticos que representamos no están armados.

Ellos han confiado en que la seguridad interna de Chile está en manos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, conforme a lo dispuesto en la Carta Fundamental y a una tradición nunca quebrantada.

Esta situación es aún más incomprensible si se considera que el Gobierno asegura contar con la lealtad de esos Institutos y que el país está tranquilo y que él controla la situación.

Si de por sí el conjunto de estos hechos es de extrema importancia, debemos señalar que se habla abiertamente por los más altos representantes del Ejecutivo de la constitución de un Poder Popular.

Esto significa de hecho crear un Ejército paralelo, en el cual están interviniendo numerosos extranjeros, lo que resulta a todas luces intolerable.

El llamado Poder Popular no es el pueblo de Chile. Son grupos políticos que se autocalifican como el pueblo y que pretenden someter por la fuerza a otros trabajadores sin titubear ante ningún medio para conseguirlo.

El presidente de la CUT designado Ministro del Trabajo dio la orden de ocupar las fábricas y establecimientos y dirigentes autorizados de los partidos de Gobierno y del MIR cuya participación es manifiesta y decisiva, han declarado abiertamente su propósito e intención de imponerse por la fuerza, sin respeto alguno por la institucionalidad y han llegado a expresar desembozadamente que se suprimió el Estado de Emergencia para facilitar sus objetivos.

No somos enemigos de las transformaciones que son necesarias para que nuestro país avance hacia nuevas formas de vida y de organización social y económica. Pero rechazamos categóricamente que se quieran realizar fuera de la ley y por medio de la violencia.

Los que durante meses han lanzado una gran campaña publicitaria contra el peligro de una Guerra Civil son los que hoy reparten armas y están de hecho arrastrando al país a un enfrentamiento que amenaza a todos los chilenos.

Quien tiene la mayor responsabilidad de esta crítica situación es el Gobierno.

Está en sus manos y es de su responsabilidad poner término a una situación cuyos peligros extremos es imposible ocultar.

La única forma de terminar, ahora, con estos riesgos es que el Gobierno se decida a normalizar la vida del país.

Para ello nos parece fundamental, entre otras medidas, que se promulgue en su totalidad la Reforma Constitucional despachada por el Congreso, avalada por un dictamen claro y preciso de la Contraloría General de la República y previo un fallo del Tribunal Constitucional que acogió la tesis del Parlamento. Su no promulgación contravendría expresamente la Constitución Política del Estado.

Es asimismo indispensable ponga término a las ocupaciones ilegales y a los grupos armados que constituyen una amenaza para el resto de la población y un poder paralelo a las Fuerzas Armadas y Carabineros que tienen el deber irrenunciable de garantizar la seguridad interna.

No queremos un conflicto irremediable. Queremos que se normalice la vida del país, que se respete la ley y la decisión de los poderes del Estado.

Por eso denunciamos en la forma más enérgica esta situación que resulta insostenible. Ningún pueblo puede resistir la tensión que crea la inseguridad permanente de los ciudadanos ante la impúdica acción de grupos armados que cuentan con amparo oficial.

El Gobierno tiene antecedentes suficientes para saber dónde están las armas y dónde se han repartido. Resulta impostergable que esos armamentos sean requisados y controlados por las Fuerzas Armadas y sancionados quienes desafían la ley.

Nuestra responsabilidad patriótica de mantener la paz entre los chilenos y de asegurar la mantención de nuestra institucionalidad democrática nos lleva a hacer este llamado solemne ante el pueblo y ante la historia para que se restablezca la legalidad y se asegure la paz antes de que sea demasiado tarde.

Nos anima sólo el propósito de defender la libertad, la justicia y la paz entre los chilenos".

LUIS PARETO

Presidente Cámara de Diputados

EDUARDO FREI M.

Presidente del Senado